

C.A. de Concepción

Concepción, veinticinco de febrero de dos mil veinte.

VISTO:

EN CUANTO AL RECURSO DE CASACIÓN EN LA FORMA.

Primero.- Que el recurrente de casación invoca la causal del artículo 768, N°5 del Código de Procedimiento Civil, en relación con el artículo 170 N°4 del mismo Código, afirmando que la sentencia impugnada carece de consideraciones de hecho y de derecho, que digan relación con la acción principal de la demanda.

Segundo.- Que el recurso se radica exclusivamente en lo resuelto por el a quo en relación con la referida petición principal que, según reza la suma del libelo pretensor, tiene por objeto “la cancelación de una inscripción”, solicitándose en el petitorio correlativo “... la cancelación parcial de la inscripción de fojas 64, del libro de Registro de Matrícula de Naves Menores, 4 de la Capitanía de Puerto de San Vicente, Talcahuano, eliminando de ella como propietario a don Arcadio de la Cruz Torres Reyes, quedando en dicho Registro como único propietario don Luis Antonio Torres Reyes, todo con expresa condenación en costas.”.

Tercero.- Que el Juez recurrido fundamenta el rechazo de la petición principal en los considerandos Vigésimo, Vigésimo Primero y Vigésimo Segundo de su sentencia, especificando en su considerando Vigésimo, las causales de cancelación de las inscripciones en el Registro de Matrícula de Naves Menores, contenidas en el artículo 21 del Decreto Ley 2.222, causales que transcribe, agregando que el actor no señaló específicamente en cuál de ellas fundaba su petición, ni tampoco argumentó en torno a la mismas.

Cuarto.- Que el reproche del recurrente discurre sobre la base de haber formulado diversas aseveraciones de hecho y de derecho, concretamente en ser la inscripción del demandado una de “papel”, vacía y carente de contenido real, así como la existencia de una dicotomía entre el *corpus* y el *animus*, todo lo cual se enmarca, -dice ahora el recurrente-, en “una acción de nulidad ampliamente desarrollada en el libelo”, que sería aquello respecto de lo cual el juez recurrido no se pronunció.

Quinto.- Que revisada la demanda, su rectificación y la réplica del actor, es posible encontrar las mismas expresiones de reproche ya transcritas en el considerando precedente, y aún otras, pues se habla de engaños, posesiones simbólicas, fraude y dobles inscripciones de embarcaciones pesqueras.



Sexto.- Pero ocurre que todo lo anterior no es traducido por parte del demandante, en ninguna acción específica y concreta. Ciertamente es que en una única ocasión utiliza la expresión “acción de nulidad de inscripción deducida en autos”, pero tal expresión genérica, carece evidentemente de la precisión mínima para poder establecer cuál era la pretensión concreta del demandante.

Séptimo.- Que es sabido que no hay nulidad sin texto expreso, razón por la cual un mínimo rigor sustantivo y procesal, exige de parte de quien pretende invalidar un acto jurídico, que identifique cuál es la norma legal que establece tal sanción para una situación específica, que clase de nulidad es la que pretende sea declarada por parte del tribunal y, por sobre todo, cuál es la causal de nulidad que invoca. Son tales elementos y definiciones los que otorgan competencia al juzgador para pronunciarse sobre las pretensiones del actor.

Octavo.- Que en el presente proceso, tales definiciones sustantivas y procesales elementales, no sólo se encuentran ausentes del cuerpo del escrito de demanda, al menos en lo que atañe a su acción principal, sino en el petitorio correlativo, que se limita a utilizar la ambigua expresión “cancelación parcial de inscripción”, que está lejos de ser una petición de nulidad, cualquiera sea a naturaleza y categoría de ésta.

Noveno.- Que frente a las carencias anotadas, derivadas de las imprecisiones y omisiones señaladas, el tribunal a quo, no podía sino actuar como lo hizo, al no pronunciarse respecto de una nulidad que sólo fue mencionada y jamás pedida, limitándose a resolver, en base al principio *iura novit curia*, asumiéndose de las normas especiales propias del derecho naviero, que contempla causales de cancelación de inscripciones registrales de naves en el artículo 21 del Decreto Ley 2.222, análisis que lo condujo a la conclusión que los supuestos que pudiesen dar origen a la aplicación de las mismas, no se habían probado en la presente causa.

Entonces, el Juez se pronunció sobre aquello que podía pronunciarse, tomando como necesaria base los escritos propios del periodo de discusión, no existiendo en consecuencia la omisión de pronunciamiento denunciada por el recurrente, ni configurándose consecuencialmente la causal de casación invocada.

EN CUANTO AL RECURSO DE APELACIÓN.

Se elimina el párrafo final del considerando Vigésimo Cuarto, desde “Es del caso ...” hasta “...cosas ajenas.”, los considerandos Vigésimo Sexto, Vigésimo Séptimo, Trigésimo Primero y Trigésimo Segundo, y se tiene en su lugar y además presente:

Décimo.- Que en la primera parte de su apelación y en lo que atañe a su **acción principal de cancelación de inscripción**, el recurrente formula



consideraciones variopintas concernientes a preguntas y respuestas de las efectuadas el demandado en el marco de la absolución de posiciones, relacionadas a la compraventa de 23 de noviembre de 2005 concerniente al 50% de la embarcación “Ana Luisa” y la posterior resciliación de dicha compraventa, suscrita entre las partes el día 28 del mismo mes y año y elucubra sobre las razones y sinrazones que rodearon a tales actos jurídicos, así como en cuanto a la oportunidad en que el demandado hizo efectivo el derecho que emanaba de la resciliación.

Undécimo.- Que tal como se explicó a propósito del recurso de casación formal pretérito, jamás el demandante impugnó derechamente la eficacia de la resciliación recién referida, pese a que en su demanda la califica de fraudulenta y maliciosa, afirmando que el actor fue engañado por el demandado para suscribirla, actuando éste de mala fe; todo lo anterior pudiese haber dado lugar al ejercicio (exitoso o no) de diversas acciones, destinada a impugnar la validez de la referida resciliación.

Duodécimo.- Que nada de lo anterior se plasmó en el libelo de pretensor, pues el actor se limitó a pedir la “cancelación parcial de la inscripción”, sin afincar su pretensión en alguna causal de nulidad o resolución específica, lo que inhabilita al sentenciador para declararla a riesgo de obrar en *ultrapetita*, siendo claro que no nos encontramos en la situación de excepción, establecida en la primera parte del artículo 1683 del Código Civil.

Décimo Tercero.- Que en lo que atañe ahora a la **acción de prescripción adquisitiva**, enarbolada subsidiariamente por el actor en su demanda, éste pide se declare la prescripción adquisitiva “... en contra de don Arcadio de la Cruz Torres Reyes.... disponiendo que don Luis Antonio Reyes es dueño por prescripción adquisitiva de la embarcación naviera menor denominada ‘María Luisa’...”. Afirma que su calidad de poseedor arranca desde “el contrato de compraventa de 27 de Febrero del año 1999 y del contrato de compraventa de fecha 23 de Noviembre de 2005 y desde el fallecimiento de su padre (26 de enero de 2006) ...” agregado luego que ha usado y gozado del bien obrando de buena fe, posesión que en calidad de señor o dueño se extiende por más de 5 años.

Décimo Cuarto.- Que, como primera cuestión, cabe hacer presente la inconsistencia que existe entre la acción principal y la subsidiaria, pues mientras en aquella se solicitaba la cancelación de la inscripción a nombre del demandado del 50% de la embarcación “Ana Luisa”, en la presente acción se pide tanto en su cuerpo como en su petitorio, que se declare la prescripción adquisitiva del total de la antedicha embarcación, en circunstancias que lo disputado alcanza sólo al porcentaje inscrito a nombre de Arcadio de la Cruz Torres Reyes.



Décimo Quinto.- Que esta circunstancia en estricto rigor, irrespeta el concepto de subsidiariedad, pero debe entenderse que la invocación de la prescripción adquisitiva como modo de adquirir, sólo alcanza al 50% inscrito a nombre del demandado, pues el otro 50% de la nave fue adquirida por el demandante por el modo tradición y es bien sabido, que sólo se puede adquirir el dominio y los demás derechos reales, por un solo modo de adquirir.

Décimo Sexto.- Que en tal entendimiento, cabe analizar si se cumplen los requisitos para invocar la prescripción adquisitiva del bien objeto de la Litis, la cual, como se ha señalado por las partes y por el juez, reviste el carácter de inmueble para los efectos de este modo de adquirir, por disponerlo así el artículo 836 del Código de Comercio.

Décimo Séptimo.- Que con ocasión de la escritura resciliación de 28 de noviembre de 2005, hecha valer registralmente por el demandado con fecha 25 de septiembre de 2014, el demandante perdió la posesión inscrita que efectivamente ostentaba, y que se había iniciado con el fallecimiento de su padre don Ernesto Torres Osorio con fecha 26 de enero de 2006, quien si bien le había enajenado a demandante y demandado por partes iguales, la nuda propiedad de la nave “María Luisa”, reflejado lo anterior en la inscripción de fojas 64, N°4 del Registro de Matriculas de Naves Menores de La Capitanía de Puerto de San Vicente de Talcahuano, se reservó para sí el usufructo vitalicio de la Nave. Como el bien cuyo 50% de propiedad se pretende prescribir adquisitivamente, lo es, con la integridad de sus atributos dominicales, sólo desde esa fecha puede computarse el plazo de usucapión.

Décimo Octavo.- Que de la forma expresada, al tiempo de demandar, el actor no revestía la calidad de poseedor inscrito respecto del 50% disputado, al haber reasumido tal calidad el demandado merced a la invocación de la resciliación tantas veces referida, lo que conlleva para el actor la pérdida de la presunción de regularidad de su posesión, al tenor de lo establecido en el inciso tercero, del artículo 830, del Código de Comercio. En efecto, tal y no otra, es la consecuencia que el legislador contempla frente a la ausencia de inscripción.

Décimo Noveno.- Que en este estado de cosas, podemos afirmar que el demandante fue poseedor entre el 26 de enero de 2006 y el 25 de septiembre de 2014, circunstancias temporales que ha sido éste tribunal quien ha debido establecer, por cuanto el demandante si bien invocó la usucapión, por una parte señaló diversas fechas para el inicio de su computó y, derechamente, ninguna refirió para la completación del lapso necesario para que cumplir con el requisito temporal necesario, limitándose a afirmar que el plazo necesario es de 5 años por revestir el carácter de poseedor regular. Esta nueva omisión del libelo de demanda, bien puede por sí sola, ser causal para el rechazo de su pretensión.



Vigésimo.- Que cabe entonces preguntarse si, efectivamente, se ha cumplido el plazo de posesión necesario, para que el actor pueda invocar eficazmente la prescripción adquisitiva en su favor.

Vigésimo Primero.- Que, como se ha recién indicado, el demandante entiende ostentar la calidad de poseedor regular, por cuanto estima estar amparado por un justo título y haber poseído de buena fe.

Vigésimo Segundo.- Que en lo que concierne al justo título, efectivamente el contrato de compraventa del 50% de la nave “María Luisa” de fecha 23 de Noviembre de 2005 tiene tal calidad, pues por su naturaleza es idóneo para transferir el dominio del bien objeto del debate.

Vigésimo Tercero.- Que en lo que atañe a la buena fe la situación es distinta. Sin olvidar que la presunción de la misma establecida en el artículo 706 del Código Civil, resulta aplicable en la especie dado su uniformemente aceptado ámbito de aplicación general, lo cierto es que tal presunción reviste un carácter simplemente legal y, por lo tanto, controvertible probatoriamente.

Vigésimo Cuarto.- Que, en la especie, constituye no sólo un hecho de la causa sino el eje fáctico y jurídico de la misma, la existencia y eficacia de la escritura de resciliación de 28 de Noviembre de 2005, suscrita por las partes de este proceso, instrumento por el cual aquéllos dejaban sin efecto la compraventa pretérita, debiendo hacerse hincapié por obvio que resulte, respecto de la circunstancia de que tal resciliación era conocida por el actor, quien sabía que el título que hoy invoca era ineficaz, producto del mutuo disenso posterior acordado por los propios otorgantes.

Vigésimo Quinto.- Que cierto es que el demandante ha alegado ignorancia respecto de su contenido, así como engaño y fraude por parte de su co-contratante, pero cierto es también que dicho acto jurídico, ha permanecido incólume a lo largo de este proceso, como se refleja a la luz de la sentencia del a quo y del presente fallo, formando a esta altura una realidad judicial incontrovertible.

Vigésimo Sexto.- Que, entonces la conclusión es evidente. Si el actor sabía que la compraventa había quedado sin efecto producto de la resciliación, entonces no puede invocar en su favor la buena fe, pues ella se contrapone frontalmente con tal conocimiento, que fue ratificado y rubricado con su firma en el documento resciliatorio.

Vigésimo Séptimo.- Que, en consecuencia, no es la prescripción adquisitiva ordinaria sino la extraordinaria aquella que debió invocar el actor y no lo hizo y, aunque lo hubiese hecho, no habría completado el plazo de 10 años contemplado en el artículo 2510 del Código Civil, por lo que está segunda acción por él incoada fue correctamente desestimada.



Vigésimo Octavo.- Que en lo que concierne finalmente a la **acción de indemnización de perjuicios por responsabilidad extracontractual**, estos sentenciadores estiman como adecuados y suficientes los fundamentos expuesto en el fallo del a quo para desecharla.

Vigésimo Noveno.- Que sólo a mayor abundamiento, es menester agregar que el demandante atribuye al demandando una conducta derechamente dolosa, en lo que atañe al manejo de la documentación pesquera, pues le asigna el propósito deliberado de causar perjuicio al demandante. Bien sabido es que la prueba de la culpa o el dolo en el ámbito extracontractual, es siempre de cargo del actor y, en la presente causa, tal prueba resultó del todo insuficiente, particularmente al imponerse el demandante a sí mismo, el estándar probatorio propio del dolo, ciertamente más exigente que aquel de la culpa, estándar que no fue capaz de alcanzar.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo previsto en los artículos 1.437, 1.445, 1.545, 1.698, 2314 y demás citadas y pertinentes del Código Civil; 801, 836 y demás pertinentes del Código de Comercio, Decreto Ley N° 2222; 144, 160, 170, 341 y 346 así como en los artículos 764, 765, 766 y 768 todos del Código de Procedimiento Civil, se declara:

I.- Se **desestima el recurso de casación en la forma** deducido en lo principal de presentación de la recurrente, en contra de la sentencia de veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho del Primer Juzgado Civil de Talcahuano.

II.- Que, **se desecha el recurso de apelación** incoado por la parte demandante y, en consecuencia, **se confirma** la sentencia de veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho del Primer Juzgado Civil de Talcahuano.

III.- Que, **no se condena en costas** al recurrente, por estimar el Tribunal que tuvo motivos plausibles para litigar.

Devuélvase en su oportunidad.

Redacción del abogado integrante Carlos Álvarez Cid.

No firma el ministro señor Fabio Jordán Díaz, por encontrarse haciendo uso de permiso.

Rol 824-2019.- Civil.





QBKEXPXXX

Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Concepción integrada por Ministro Suplente Gonzalo Rojas M. y Abogado Integrante Carlos Rodrigo Alvarez C. Concepcion, veinticinco de febrero de dos mil veinte.

En Concepcion, a veinticinco de febrero de dos mil veinte, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

